



Consejo Económico y Social

Distr.
GENERAL

E/CN.4/1997/SR.22
19 de septiembre de 1997

ESPAÑOL
Original: FRANCES

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

53º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 22ª SESIÓN

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,
el martes 25 de marzo de 1997, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. SOMOL (República Checa)

SUMARIO

Declaración del Sr. Camilo Reyes Rodríguez, Viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia

Declaración del Sr. Pierre-Henri Imbert, Director de Derechos Humanos del Consejo de Europa

Medidas para mejorar la situación de todos los trabajadores migrantes y hacer que se respeten sus derechos humanos y su dignidad (continuación)

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además, incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento , a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas se reunirán en un documento único que se publicará poco después de la clausura del período de sesiones.

GE.97-11291 (S)

Los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (continuación)

Aplicación de la Declaración sobre eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones (continuación)

Se declara abierta sesión a las 10.10 horas .

DECLARACIÓN DEL SR. CAMILO REYES RODRÍGUEZ, VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

1. El Sr. REYES RODRÍGUEZ (Colombia) subraya en primer lugar la obligación de todo Estado de proteger y defender el núcleo esencial de los derechos humanos, o sea, el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad, y de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, garantizando la realización del derecho al desarrollo, tanto en el plano interno como en sus relaciones internacionales. Habida cuenta de los obstáculos que representan a este respecto la violencia y la pobreza, los Estados necesitan frecuentemente asistencia. El fortalecimiento de la cooperación internacional, cuya realización constituye uno de los fines de las Naciones Unidas, reviste pues una importancia capital.

2. La finalidad primordial de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacionales, y, con este objetivo, adoptar medidas colectivas eficaces para prevenir y conjurar las amenazas a la paz. Sin embargo, hoy día no son solamente las guerras entre naciones las que hacen planear una amenaza sobre la paz internacional sino también, y cada vez con más frecuencia, los conflictos armados internos. La comunidad internacional debe condenar firmemente a los actores armados no estatales que quieren imponer su ideología a pueblos y naciones recurriendo a prácticas bárbaras, de las cuales las masacres, los asesinatos, el secuestro, la tortura y el uso de minas antipersonales son dramáticos ejemplos. A pesar de las directrices promovidas por la Comisión de Derechos Humanos en este sentido, hay quien persiste en pensar que, a los efectos de la aplicación de todos los mecanismos y procedimientos especiales de protección de los derechos humanos, sólo debe tenerse en cuenta la responsabilidad de los Estados como garantes de la protección y la defensa de esos derechos. El Gobierno colombiano no pone en duda esta responsabilidad, insoslayable para todo Estado que pretenda ser democrático. No obstante, el silencio internacional y la ausencia de voces condenatorias de la conducta de grupos subversivos o terroristas generan confusiones en el interior de las naciones que sufren tales adversidades, y cabría pensar finalmente que la comunidad internacional muestra una cierta complacencia hacia esos grupos. Es evidente que hoy día la condena de los violentos es una condición previa de la eficacia de la cooperación internacional, para liberar a la humanidad del azote que representan las violaciones de los derechos fundamentales.

3. El 50º aniversario de la Comisión es la oportunidad para mejorar los mecanismos de cooperación existentes con objeto de ayudar a los Estados a superar sus dificultades en materia de derechos humanos. A este respecto, cabe felicitarse de la conclusión del acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el 29 de noviembre de 1996, por el que se instalará una oficina de los derechos humanos en Santa Fe de Bogotá, que empezará a funcionar el 6 de abril de 1997. Esta oficina se mantendrá al corriente de la situación de los derechos humanos en el país, recibirá las quejas sobre violaciones de esos derechos, incluidas las infracciones a las normas humanitarias aplicables en los conflictos armados, y asesorará a las autoridades nacionales en la formulación de políticas y

medidas para promover y proteger los derechos humanos y garantizar la observancia del derecho internacional humanitario. A su vez, el Alto Comisionado presentará a la Comisión un informe analítico sobre la gestión de la oficina y la situación de los derechos humanos en Colombia.

4. El Gobierno está decidido a poner fin a la violencia en Colombia y apoyará sin reservas la acción de la oficina, que le ayudará a superar los problemas con que se enfrenta en el ámbito de los derechos humanos, y que son debidos en buena medida a la existencia de un conflicto armado interno en el país. Pide a la Comisión y a todos los países miembros que confíen en su Gobierno y apoyen sus esfuerzos para hacer realidad la convivencia pacífica, aspiración unánime de todos los colombianos.

DECLARACIÓN DEL SR. PIERRE-HENRI IMBERT, DIRECTOR DE DERECHOS HUMANOS DEL CONSEJO DE EUROPA

5. El Sr. IMBERT (Consejo de Europa) dice que el Consejo de Europa no ha cejado nunca en sus esfuerzos por fomentar y proteger los derechos humanos en todo el continente. La primera gran victoria obtenida en este campo fue la adopción del Convenio Europeo de Derechos Humanos: 34 de los 40 Estados miembros del Consejo de Europa son partes en este Convenio, y reconocen el derecho de recurso individual y la competencia obligatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

6. En lo relativo a los derechos económicos y sociales, que poseen una importancia especial en una Europa enfrentada a los problemas del desempleo y la exclusión, en 1996 se aprobó, y se abrió a la firma, una nueva versión completamente revisada de la Carta Social Europea de 1961. Esta versión se completará con un protocolo gracias al cual las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y las organizaciones no gubernamentales, tendrán la posibilidad de presentar reclamaciones colectivas. En lo referente a los derechos de las minorías, el Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales, aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 1994, debería entrar en vigor próximamente.

7. Asimismo, la Asamblea Parlamentaria y el Comité de Ministros del Consejo de Europa han decidido establecer un sistema que permitirá verificar si los Estados miembros respetan efectivamente los compromisos contraídos en lo que respecta al ejercicio de los derechos fundamentales y a la aplicación de las normas de la democracia pluralista y la primacía del derecho.

8. Sin embargo, a pesar de todos estos progresos, los trágicos acontecimientos ocurridos en los últimos años en la ex Yugoslavia, en Chechenia y, más recientemente, en Albania, son un recordatorio para la comunidad internacional de que queda aún mucho camino por recorrer. En particular, deben lograrse progresos en la lucha contra el racismo y la intolerancia, y en la promoción de la igualdad entre los sexos.

9. A iniciativa de los Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa, en 1994 se emprendió una vasta campaña europea de lucha contra el racismo, con la participación activa de los jóvenes; la Comisión Europea contra el Racismo y

la Intolerancia (ECRI) tiene la misión de evaluar la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados miembros al respecto, formular recomendaciones y estudiar los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes con miras a su posible fortalecimiento.

10. En cuanto al fomento de la igualdad entre los sexos, el Consejo de Europa se esfuerza por poner en práctica, a escala europea, el programa de acción aprobado por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer; el eje de sus actividades es, en particular, la lucha contra la violencia de que son víctimas las mujeres, la protección del derecho de la mujer a la libre elección en materia de procreación, los problemas específicos de las mujeres migrantes y la participación equilibrada de los dos sexos en el sistema democrático. En lo relativo a este último punto, el Consejo de Europa sigue estando profundamente preocupado por la escasa representación femenina en las más altas instancias ejecutivas de los países europeos.

11. En su afán de proteger los logros alcanzados en la protección de los derechos humanos, el Consejo de Europa se ha pronunciado firmemente en favor de la abolición de la pena de muerte y pide a todos sus nuevos miembros que se comprometan a aplicar, con efecto inmediato, una moratoria de las ejecuciones y a ratificar, en un plazo determinado, el Protocolo N° 6 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que se refiere a la abolición de la pena de muerte. La propuesta de Italia sobre esta cuestión merece el apoyo sin reserva de todos los gobiernos que son partidarios sinceros de la primacía del derecho.

12. El Consejo de Europa está convencido de la necesidad de sensibilizar a todos los sectores de la sociedad con respecto a los derechos humanos, y aprecia en grado sumo los esfuerzos en este sentido de los órganos de las Naciones Unidas, y en especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que le merece su más alta consideración. Dado que los problemas no parecen irse resolviendo, es indispensable que esta experiencia sea compartida a todos los niveles de la comunidad internacional, los gobiernos nacionales y los representantes gubernamentales, las secretarías de las organizaciones intergubernamentales y los representantes de las organizaciones no gubernamentales.

MEDIDAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRANTES Y HACER QUE SE RESPETEN SUS DERECHOS HUMANOS Y SU DIGNIDAD (tema 11 del programa) (continuación) (E/CN.4/1997/65)

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A MINORÍAS NACIONALES O ÉTNICAS, RELIGIOSAS Y LINGÜÍSTICAS (tema 17 del programa) (continuación) (E/CN.4/1997/82 y 83; E/CN.4/Sub.2/1996/2 y 28; A/51/536)

APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE INTOLERANCIA Y DISCRIMINACIÓN FUNDADAS EN LA RELIGIÓN O EN LAS CONVICCIONES (tema 19 del programa) (continuación) (E/CN.4/1997/91 y Add.1; E/CN.4/1997/NGO/19; A/51/542/Add.1 y Add.2)

13. El Sr. MUSA (Malasia) reafirma la adhesión de su país a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en su Constitución y subraya que corresponde al Gobierno -como a todos los demás gobiernos- garantizar esta protección. Para ello necesita mantener la

estabilidad del Estado así como su seguridad y la de sus ciudadanos, oponiéndose a todo elemento desestabilizador. La delegación de Malasia hace suyo sin reservas lo indicado en el párrafo 99 del informe del Relator Especial sobre la intolerancia religiosa (E/CN.4/1997/91), con respecto a ciertos abusos cometidos por las sectas, que el Estado no debe tolerar. En lo relativo a los extremistas religiosos de Malasia, debe precisarse que los miembros de la secta Al-Arqam, que habían sido encarcelados, fueron puestos en libertad en 1996.

14. El Sr. Musa constata con inquietud que, para el Occidente, el islam representa un peligro. Se está creando un sentimiento antiislámico engendrado por los prejuicios y el miedo, que ha de contribuir forzosamente a desestabilizar el planeta. El islam se ha convertido en sinónimo de intolerancia y de terrorismo, hasta el punto de que toda acción terrorista se atribuye de manera instantánea y sistemática a los musulmanes, como se vio en el caso del atentado de Oklahoma City. Es escandaloso que, en esta ocasión, ni siquiera se hayan presentado excusas a la comunidad musulmana.

15. Se produce una situación paradójica cuando, por una parte, se acusa al islam de fomentar el terrorismo y la intolerancia y, por la otra, los derechos de las minorías musulmanas son objeto de violaciones cada vez más graves en ciertas partes del mundo. Ahora bien, son estas violaciones las que, al suscitar sentimientos de desamparo y desesperación, pueden inducir a ciertos activistas a cometer actos de terrorismo.

16. Asimilar el islam al terrorismo, el extremismo y la intolerancia es errar el camino. El islam enseña la paz y la solidaridad entre los seres humanos, sea cual fuere su raza o su religión, condena el terrorismo, el extremismo y la intolerancia, y encarna todos los derechos protegidos por la Carta Internacional de Derechos Humanos y por las numerosas declaraciones y convenios de las Naciones Unidas. Es el ideal islámico el que inspiró a la Organización de la Conferencia Islámica la Declaración sobre los Derechos Humanos en el Islam, aprobada en 1990.

17. En Malasia, país de múltiples razas, culturas y religiones, la tolerancia religiosa es uno de los fundamentos mismos de la unidad nacional, y la intolerancia religiosa está proscrita. Esto ha fortalecido la estabilidad política del país, permitiendo al Gobierno consagrarse al desarrollo económico. Así pues, gracias a la tolerancia religiosa, la estabilidad política y una sana estrategia de desarrollo, su país goza desde hace diez años de un crecimiento económico de más del 8% al año, por término medio. Malasia se siente orgullosa de su éxito, y de ser musulmana.

18. El Sr. OAZI (Pakistán) dice que, si bien la historia de la humanidad abunda en migraciones de todo tipo, los derechos de los migrantes, en particular los trabajadores, no cuentan mucho. En casi todos los países a los migrantes y sus descendientes se les trata como ciudadanos de segunda clase. Al no beneficiarse de medidas de integración, quedan marginados y la intensificación de la xenofobia agrava aún más sus dificultades. Es esencial

pues proteger los derechos de los trabajadores migrantes, tanto en el ordenamiento jurídico interno de cada Estado como en el derecho internacional.

19. Sin embargo, los textos no bastan. Para que se pueda considerar a los migrantes copartícipes en el desarrollo económico y cultural, y no usurpadores, es menester que las mentalidades evolucionen. Por medio de la enseñanza y la información, hay que poner fin a la desconfianza de que son objeto y permitirles que se integren en la sociedad en la que viven, sin por ello perder su identidad cultural, religiosa y social.

20. El Relator Especial sobre la cuestión de la intolerancia religiosa ha presentado un informe (E/CN.4/1997/91) que merece un estudio detenido, seguido de efectos prácticos. La delegación del Pakistán le comunicará más adelante sus comentarios sobre varias observaciones relativas a Jammu-Cachemira y al Pakistán, que figuran en el informe sobre su visita a la India (E/CN.4/1997/91/Add.1).

21. En el Pakistán, la igualdad entre los musulmanes, los cristianos, los hindúes y los fieles de otras religiones es un hecho. Esta igualdad, proclamada a la fundación del país en 1947, ha sido reafirmada por el Primer Ministro, Sr. Nawaz Sharif, y forma parte de los preceptos del islam en que se basa la Constitución. Esta garantiza, con disposiciones concretas, los derechos de las minorías; en particular, sus artículos 20, 21 y 22 garantizan el derecho a profesar la religión que se desee y a recibir una instrucción religiosa, sin ser objeto de discriminación alguna de carácter fiscal, o en la admisión a la enseñanza pública. Las disposiciones de la Constitución que garantizan la igualdad de acceso a la función pública y a los servicios, así como la preservación de la cultura de los diversos estratos sociales, se han plasmado en leyes e instrumentos administrativos y en la creación del Ministerio de Asuntos de las Minorías, de una Comisión Nacional de las Minorías, de un Consejo Consultivo Federal para los Asuntos de las Minorías, de comités de distrito para las minorías y del Comité Nacional para el Pueblo Kalash.

22. Las minorías se benefician de una protección social especial, y existen fondos para ayudarles financieramente en su vida cotidiana. Se ha creado un sistema de premios culturales nacionales de literatura, bellas artes, artes del espectáculo y arte popular, destinados exclusivamente a las minorías. Gracias a estas medidas preferentes, y a un sistema de concursos no discriminatorio, el Pakistán cuenta, en todos los sectores, con la valiosa colaboración de personal perteneciente a las minorías.

23. En cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Relator Especial a raíz de su visita al país en 1995, el Pakistán, entre otras cosas, ha modificado -como ya estaba previsto- el sistema electoral a fin de que las minorías puedan participar directamente en las elecciones y elegir a sus propios representantes.

24. El representante del Pakistán señala el peligro de que la tolerancia y el respeto al pluralismo sirvan de pretexto a intereses extranjeros, deseosos de ocupar o dominar un país. El Pakistán es víctima de un extremismo y un terrorismo de inspiración extranjera, cuya finalidad es desestabilizar el país en el momento en que éste trata sinceramente de promover el respeto a los derechos humanos, la armonía religiosa y una sociedad liberal, moderada y tolerante. El mundo democrático no puede dejar de sostener estos esfuerzos del Pakistán.

25. El Sr. KRYLOV (Federación de Rusia) destaca la enorme complejidad del problema de las minorías, que ya la Sociedad de las Naciones no había podido resolver y que actualmente puede ser causa de conflictos y crisis que ponen en peligro la paz, la seguridad y las relaciones amistosas entre las naciones. La comunidad internacional, sin excepciones, debe comprometerse en firme a proteger los derechos fundamentales, incluidos los de las personas pertenecientes a las minorías, con toda equidad y objetividad y sin caer en la tentación del "doble rasero".

26. En Rusia hay decenas de minorías nacionales y étnicas. La Constitución de la Federación de Rusia y las cartas constitucionales de las divisiones administrativas y territoriales que la forman establecen la obligación del Estado de proteger los derechos de las minorías. Por eso Rusia procura que sus minorías desarrollen su cultura, aprendan su lengua materna y estén representadas a escala tanto federal como local.

27. De resultas del hundimiento de la Unión Soviética, 25 millones de rusos viven fuera de Rusia y la sociedad rusa no puede permanecer indiferente a su suerte, en los nuevos Estados independientes. Las minorías rusas sufren de resultas de la prioridad atribuida a los nacionales de estos Estados, y de las manifestaciones de un nacionalismo agresivo. El espacio cultural ruso se ha reducido, y les es difícil recibir una educación en ruso; algunas organizaciones que defendían sus intereses han sido prohibidas. Como ha subrayado el Presidente Boris Yeltsin, uno de los principales cometidos de la política extranjera rusa será, como en el pasado, proteger los derechos de las poblaciones rusas en el extranjero, en particular en Estonia y en Letonia. Los rusos no olvidarán los derechos legítimos de sus compatriotas, independientemente de su voluntad de mantener buenas relaciones con sus vecinos. Esta actitud de Rusia se inspira en la necesidad de proteger los derechos humanos y rechazar toda forma de discriminación, y en la obligación moral y jurídica de los miembros del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y no en propósitos imperialistas.

28. Rusia trata de conciliar dos necesidades: proteger los derechos de las minorías nacionales y respetar el principio de la integridad territorial de los Estados. La constitución de un mundo democrático multipolar exige que se aplique rigurosamente la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. La Comisión deberá hacer de ello una de sus prioridades. Es protegiendo los derechos de las minorías como la sociedad dará prueba de su adhesión al pluralismo, a la primacía del derecho y al respeto de los derechos humanos.

29. El Sr. GHOSE (India) dice que en los debates sobre los puntos 13, 17 y 19 del programa se va viendo cada vez con más claridad que la Comisión debe encontrar los medios de promover el pluralismo y la tolerancia. A este respecto, convendría que las actividades del Grupo de Trabajo sobre las Minorías de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías se pongan en conocimiento de los gobiernos, de las organizaciones no gubernamentales y de los medios de comunicación, a fin de que tengan una resonancia internacional; asimismo, debería promulgarse el mandato del Grupo de Trabajo por un período de dos años y proporcionarle los recursos necesarios para cumplirlo adecuadamente.

30. Casi todas las naciones y religiones conocen el problema del extremismo y la intolerancia religiosa, y de la tendencia ascendente de un cierto integrismo religioso. Sea cual fuere su origen -las presiones ejercidas sobre sociedades heterogéneas para uniformizarlas, o el sentimiento de alienación creado por las exigencias de la vida moderna-, estos fenómenos entrañan el peligro de una deriva hacia la violencia, o incluso el terrorismo. Todos los países deben encontrar las soluciones adecuadas y en un marco democrático, estableciendo fundamentos sólidos de igualdad y no discriminación, reforzando las leyes, promoviendo una cultura de tolerancia mediante la educación y recurriendo para ello a la sociedad civil y a los medios de comunicación.

31. La India, que no es ajena a esos problemas, participa activamente en la aplicación de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, así como en los trabajos del Sr. Amor, Relator Especial sobre la cuestión de la intolerancia religiosa. En consecuencia, el Gobierno de la India invitó al Relator Especial, que se entrevistó con representantes de todos los niveles y sectores del mundo político y de la sociedad civil. La capacidad de observación del Sr. Amor y la seriedad con que ha realizado su trabajo le han permitido captar algunas de las complejidades de este viejo país de 950 millones de habitantes, que se encuentra en plena evolución social y económica. La India se caracteriza por su gran diversidad, no sólo en el plano religioso sino también en otras muchas esferas. Esta diversidad tiene su salvaguardia en el pueblo, profundamente imbuido de pluralismo y tolerancia, y en la Constitución, que ha dado un marco formal a este ideal. Ciertamente es que en un país tan vasto y complejo no se puede estar del todo a salvo de una manifestación de intolerancia pero, como ha observado el Relator Especial (E/CN.4/1997/91), se trata de aberraciones condenadas no sólo por las autoridades sino también por el público en general.

32. El representante de la India se felicita de que el Relator Especial haya encontrado satisfactoria la situación, pero rechaza su tesis de que la pobreza, así como la estructura económica y social del país -es decir el sistema de castas- conduzcan a la intolerancia religiosa. Si bien no cabe duda de que los pobres son más vulnerables a la explotación con fines políticos o de otro orden, en lo tocante al sistema de castas las leyes, con sus correspondientes disposiciones administrativas y programas de educación,

impiden que dicho sistema sirva de base a cualquier tipo de discriminación. El sistema propiamente dicho no se ha abolido, pero hay una revolución social en marcha: aquellos que en el pasado eran objeto de discriminación por razón de su casta empiezan a hacer oír su voz y a transformar una desventaja social en poder político. En cualquier caso, no hay que confundir la casta -fenómeno social- con la religión.

33. Como ha señalado el Relator Especial hay quienes tratan de perturbar la estructura democrática de la India mediante "la utilización de la religión para obedecer a un plan que, en realidad, es político". En el caso de Jammu-Cachemira y del Punjab, el Relator Especial ha exhortado a todas las partes interesadas, oficiales o no, nacionales o extranjeras, a que procuren que las variables políticas no intervengan en las constantes de las religiones en detrimento de los derechos religiosos de las comunidades y, de manera general, de la tolerancia y de la no discriminación fundadas en la religión; la India apoya al Relator Especial sin reservas. En una democracia es difícil impedir la explotación del factor religioso con fines políticos: contra el fundamentalismo violento, las armas han de ser políticas e ideológicas. Su país es muy consciente de ello, y adopta todas las medidas necesarias para que las cuestiones políticas no asuman en ningún lugar una connotación religiosa.

34. La India no subestima las dificultades inherentes a la coexistencia entre una extrema pobreza y una gran prosperidad. Está de acuerdo con el Relator Especial en que la educación, en la escuela y en la familia, es un gran paso hacia la tolerancia, pero considera que un desarrollo económico acelerado es igualmente necesario; por ello se ha puesto en marcha en el país una reforma económica.

35. El Gobierno de la India ha tomado nota de las otras recomendaciones del Relator Especial, como la de reglamentar la dependencia financiera de los movimientos políticos y religiosos con respecto al extranjero y proteger a las escuelas contra el adoctrinamiento político o ideológico. Se recomienda también que el Centro de Derechos Humanos preste servicios de asesoramiento con la finalidad de organizar cursillos para personal docente. Toda asistencia en esta esfera será bienvenida, pero no hay comparación posible entre los recursos financieros y humanos del Centro y la amplitud del problema: se trata de eliminar el analfabetismo de más del 40% de una población de 950 millones de personas.

36. En el quincuagésimo aniversario de su independencia, la India confía en el futuro porque su democracia se asienta en una tradición secular de tolerancia, y su lucha contra el colonialismo tuvo por objeto liberar al pueblo entero, y no a uno u otro grupo. Su adhesión a la "unidad en la diversidad" constituye una base viable para la organización democrática de una sociedad de múltiples religiones y lenguas. Su país está convencido de que a la comunidad internacional le queda aún mucho que hacer en la promoción de la tolerancia y el pluralismo, y exhorta una vez más al Centro de Derechos Humanos a que no se limite a los estudios solicitados por la Comisión y la Subcomisión, sino que organice reuniones técnicas y seminarios, movilice los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales, aliente el

intercambio de datos de la experiencia y ayude a los países por conducto de sus actividades de cooperación técnica. La acción del Centro debe estar en consonancia con la amenaza que suponen el extremismo, el exclusivismo y la intolerancia, así como los conflictos y la violencia que pueden engendrar.

37. La Sra. KUPCHYNA (Belarús) declara que su país pone en práctica todos los medios para aplicar la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. Refiriéndose a la situación de las minorías en Belarús, subraya la armonía reinante entre los grupos étnicos y confesionales de la sociedad.

38. En el plano legislativo, el período de transición hacia la democracia y la economía de mercado se caracteriza por el reconocimiento de un hecho: la protección de los derechos humanos es esencial para el mantenimiento de la paz y la estabilidad. Las disposiciones de la Constitución que garantizan los derechos de las personas pertenecientes a las minorías se han plasmado en una serie de leyes (sobre las minorías nacionales, la educación, las lenguas, los derechos del niño, etc.). Además, Belarús proyecta adherirse al Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales, del Consejo de Europa. El 24 de octubre de 1994 su país firmó la Convención de la CEI sobre la protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales.

39. Entre enero de 1995 y enero de 1997, un consejo de coordinación encargado por el Consejo de Ministros de la República de Belarús de las cuestiones relativas a las minorías nacionales ha coordinado las actividades de los órganos estatales y de las organizaciones sociales, en lo referente a las relaciones entre las nacionalidades. Por Decreto presidencial de 11 de enero de 1997 se ha creado el Comité de Estado para los asuntos relativos a la religión y la nacionalidad, que está encargado de analizar y promover la cultura, los intereses y las necesidades de las minorías nacionales. En la actualidad hay decenas de asociaciones culturales de las diversas nacionalidades que residen en el país (rusos, polacos, ucranianos, lituanos, judíos, alemanes, coreanos, azerbaiyanos, tártaros y moldavos).

40. En muchos países hay planteados conflictos de origen étnico o religioso. En el territorio de Belarús hay unos 100.000 migrantes clandestinos, la mayoría de los cuales tratan de obtener la condición de refugiado alegando que tienen serias razones de creer que si regresasen a su país serían objeto de persecución por causa de su raza, religión, ciudadanía o nacionalidad. Las autoridades de Belarús están convencidas de que si todos los países aplicasen la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, se evitarían muchos de los problemas de los refugiados.

41. El Gobierno de Belarús ve favorablemente las actividades del Grupo de Trabajo sobre las Minorías. Apoya en particular la recomendación que figura en el párrafo 206 del informe del Grupo de Trabajo sobre su segundo período de sesiones (E/CN.4/Sub.2/1996/28), relativa al acopio de información y a la

preparación de estudios concisos sobre el contenido y el alcance de los principios fundamentales de la Declaración. Así es, en el futuro el Grupo de Trabajo deberá concentrar sus esfuerzos en la aplicación práctica de las disposiciones de la Declaración.

42. En cuanto a la aplicación de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, la Sra. Kupchyna dice que actualmente se está registrando en Belarús un renacimiento religioso extraordinariamente rápido. La Iglesia refuerza su presencia; de 1986 a 1996, el número de comunidades religiosas ha pasado de 842 a 2.016. Además, misioneros de diversas confesiones -en particular católicos, judíos y musulmanes- procedentes del extranjero crean centros religiosos. Basándose en la Constitución y en los principios del derecho internacional, el Gobierno de Belarús toma las medidas del caso para proteger el honor, la salud, los derechos y los intereses legítimos de sus ciudadanos, y para evitar cualquier manifestación de odio o de violencia fundada en la religión. En efecto, algunos misioneros extranjeros son portavoces de sectas. Por orden de fecha 17 de enero de 1995, el Parlamento autorizó al Gobierno a reglamentar la actividad de los miembros de las comunidades religiosas extranjeras en el territorio nacional; esta disposición va destinada desde luego a las organizaciones religiosas que predicán el odio, la violencia y la denegación de los deberes cívicos, o exaltan el suicidio.

43. La Constitución garantiza la igualdad de las religiones ante la ley. El Estado no proporciona apoyo financiero a ninguna organización religiosa. En su caso, se devuelven a la Iglesia bienes que le pertenecían, y se restauran edificios del patrimonio religioso que poseen un valor cultural o histórico.

44. El Sr. WANG Zuoan (China) observa que, a los 15 años de su aprobación por la Asamblea General, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones ocupa un lugar importante en los trabajos de la Comisión. Por su parte, desea referirse brevemente a la política religiosa de China y a la situación de la religión en su país.

45. En China hay más de 100 millones de seguidores de diversas religiones (budismo, taoísmo, islam o religiones cristianas). Desde que se creó la República Popular de China, el Gobierno protege la libertad religiosa y los derechos de los creyentes, y ha propugnado siempre el respeto mutuo, la igualdad y la tolerancia entre creyentes y no creyentes; no se admite ninguna discriminación basada en esta diferencia. La libertad de convicciones religiosas está inscrita en la Constitución, y las comunidades religiosas pueden practicar libremente su culto en la medida en que no se injieran en los asuntos administrativos y judiciales del país. Representantes de medios religiosos son elegidos a las asambleas populares y participan en debates sobre cuestiones nacionales y locales. El Gobierno consulta a las autoridades religiosas cuando prepara la legislación relativa a estos asuntos.

46. El Gobierno de China atribuye gran importancia al respeto y la protección de la libertad religiosa por vía legislativa. En enero de 1994 se promulgaron dos importantes textos: el reglamento administrativo para los lugares en que se realizan actividades religiosas y las normas administrativas sobre las actividades religiosas de los extranjeros en el territorio de la República Popular de China.

47. Siempre que se ajusten a la ley, los grupos religiosos pueden dedicarse con plena independencia a sus actividades y a la enseñanza de su religión, publicar revistas, difundir obras religiosas y establecer escuelas de religión para formar a jóvenes teólogos. Asimismo pueden efectuar intercambios con grupos e individuos religiosos extranjeros, participar en conferencias internacionales y organizar peregrinajes. En China hay unas 2.000 comunidades religiosas, 200.000 docentes de diferentes religiones, 48 escuelas e instituciones religiosas y más de 70.000 lugares de culto. Dicho esto, los ciudadanos tienen obligaciones, como en todo estado de derecho, entre ellas la de abstenerse de atentar contra la seguridad pública y el orden social.

48. Importa que los países, con su rica diversidad, mantengan a intercambios mutuos para la lucha contra los prejuicios. China está dispuesta, protegiendo la libertad de religión, a contribuir a la paz del mundo, a la justicia social y a las relaciones amistosas entre los pueblos de todos los países.

49. La Sra. GABR (Egipto) declara que la idea fundamental que subyace en las cuestiones que se están considerando es la aceptación del Otro, sea éste un trabajador migrante o un miembro de otra comunidad religiosa o lingüística. Los participantes en la Mesa Redonda organizada por las Naciones Unidas el 21 de marzo, en ocasión del Día Internacional de Eliminación de la Discriminación Racial, exhortaron a la comunidad internacional a luchar contra el racismo de que son víctimas los inmigrantes y a adherirse a la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. En la actualidad sólo una decena de países, entre ellos Egipto, se han adherido a esta Convención. En este contexto, cabe señalar que un cierto número de países dispuestos a imponer sus modelos a otros son reacios a comprometerse en la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes. La adhesión de los países de acogida a esta Convención supondría un viraje decisivo en el plano social y político, y el inicio del repliegue del racismo en todas sus formas. Las autoridades egipcias aprueban la propuesta de constituir un grupo de expertos gubernamentales encargados de estudiar los obstáculos que impiden a los trabajadores migrantes gozar plenamente de sus derechos.

50. La Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión y las convicciones es otro instrumento esencial. El Gobierno egipcio, convencido de la importancia que reviste la tolerancia, ha cooperado en todo momento con el Relator Especial sobre la cuestión de la intolerancia religiosa. Se felicita del excelente informe que éste ha presentado (E/CN.4/1997/91), y de lo que se dice en él sobre la situación en Egipto. Las autoridades políticas y religiosas han condenado de

modo enérgico los actos terroristas aislados cometidos recientemente en el país. El extremismo, y en particular el extremismo religioso, es un flagelo que amenaza a todas las sociedades. Los Estados deben hacer todo lo posible por evitar el aprovechamiento de la religión con fines políticos.

51. En esta perspectiva, nunca se insistirá bastante en la función de la educación para crear una cultura de tolerancia; por lo demás, el Relator Especial ha dedicado una parte de su informe a esta cuestión. Las autoridades egipcias han instalado un sistema simplificado de enseñanza de los derechos humanos a los niños, y colaboran con la UNESCO en la difusión de libros infantiles que transmitan el espíritu de la tolerancia. Saber aceptar al Otro será un parámetro fundamental en la evolución de las sociedades del mañana, que determinará la capacidad de estas sociedades de asimilar ideas nuevas e integrar a personas de otras culturas. Todos los Estados y organizaciones internacionales deberían cooperar en este empeño; estos esfuerzos podrían coronarse con la celebración de una conferencia internacional contra el racismo, antes de que finalice el siglo.

52. El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) declara que la deterioración de las actitudes hacia los trabajadores migrantes y hacia los extranjeros en general tiene diversas causas. Una de ellas es la insuficiente protección de los derechos de los trabajadores migrantes, y en particular los clandestinos, y las declaraciones xenófobas de personas irresponsables. En un momento en el que los desplazamientos de población son cada vez más numerosos y complejos en todo el mundo, los migrantes hacen de chivo expiatorio de todos los males que sufren las sociedades que los acogen. Por su parte, los Estados de acogida reaccionan con frecuencia adoptando medidas defensivas y restrictivas. A menudo la población ataca a los inmigrantes, individual o colectivamente; es urgente pues que la comunidad internacional proteja sus derechos.

53. En febrero de 1996, la Organización Internacional para las Migraciones celebró una mesa redonda sobre el respeto efectivo de los derechos y la dignidad de los migrantes. La Organización constató que no había ningún instrumento internacional ampliamente ratificado sobre este asunto, ni un organismo de seguimiento de la aplicación de las normas a este respecto, ni un organismo intergubernamental internacional encargado de promover la protección de los derechos humanos fundamentales de los migrantes, ni tampoco un amplio movimiento de apoyo de organizaciones no gubernamentales. La Organización observó también que numerosos Estados miembros eran muy reacios a aceptar las normas sobre los derechos de los migrantes. Por desgracia, los medios de comunicación no parecen haber prestado atención a esta reunión. El programa de acción adoptado por la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo contiene elementos interesantes sobre el tema de los trabajadores migrantes.

54. El problema de las migraciones debe considerarse en la óptica del respeto a los derechos fundamentales del ser humano, pero también de los problemas del empleo y las condiciones de trabajo. Habida cuenta del fenómeno de la mundialización y la liberalización de la economía, conviene que, al igual que los desplazamientos de capitales, bienes y servicios, se tome en

consideración la circulación de las personas en el contexto de la producción. Al no reconocer el valor de este elemento, se ha permitido que prospere el tráfico de trabajadores clandestinos y que se adopte un cierto número de medidas escandalosas. La mundialización es sin duda alguna un objetivo encomiable; sin embargo, este proceso debe permitir no sólo la apertura de los mercados, sino también la de las mentes y los corazones.

55. No hay que tener miedo de las migraciones. La historia enseña que son un factor de enriquecimiento intelectual, espiritual y material. Bangladesh pide a la comunidad internacional una reflexión en profundidad sobre la cuestión de las migraciones, incluidos los derechos de los migrantes. Todos los Estados deben reconocer a los migrantes un conjunto mínimo de derechos fundamentales. La Comisión puede desempeñar ciertamente un papel activo en esta esfera.

56. El Sr. LILLO (Chile) observa con preocupación que un número creciente de trabajadores migrantes son víctimas de la intolerancia, la discriminación, la xenofobia y el racismo, y se encuentran cada vez más marginados socialmente. Se les trata como ciudadanos de segunda clase y a menudo se les somete a diversas formas de explotación, algunas veces asimilables a la esclavitud. En el sector del empleo, son objeto de discriminación en lo que se refiere tanto a la calidad del trabajo como al nivel de remuneración. Es lamentable que se vea a las migraciones desde una óptica negativa y que a los trabajadores migrantes se les considere más como una carga social que como una riqueza para el país de acogida.

57. Es cierto que muchos trabajadores migrantes abandonan su país en busca de una situación mejor, pero la migración no es solamente una respuesta a situaciones humanas difíciles, sino que forma parte integrante del fenómeno de la mundialización. En un mundo de creciente interdependencia, es paradójico que se fortalezcan las prácticas de discriminación y de rechazo. La aplicación de políticas y leyes cada vez más restrictivas es causa de inquietud, porque estas medidas contribuyen a favorecer las actitudes y los comportamientos xenófobos y racistas. Tal y como se plantea hoy, el problema de los trabajadores migrantes y de sus familias no es sólo un elemento de la confrontación "norte-sur"; es un fenómeno mucho más complejo, que se registra incluso entre países en desarrollo.

58. Dada la magnitud del fenómeno, la delegación de Chile apoya la iniciativa de la delegación de México para que se cree, en el marco de la Comisión, un grupo de trabajo encargado de analizar estos problemas con un criterio universal, identificar los principales obstáculos que impiden a los trabajadores migrantes ejercer plenamente sus derechos fundamentales y, a partir de sus conclusiones, proponer soluciones. En Chile, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares se encuentra en trámite parlamentario, y el Gobierno espera que el procedimiento de ratificación de este importante instrumento se concluya en breve.

59. El Sr. GOONETILLEKE (Sri Lanka) señala que en la Declaración de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas no sólo se enuncian los derechos de las minorías, cuya realización incumbe principalmente a los Estados, sino que además se recuerdan ciertos principios que figuran en otros varios instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos, en particular en el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe expresamente la apología del odio nacional, racial o religioso. Esto significa claramente que las minorías tienen desde luego derechos, pero también algunas obligaciones hacia el conjunto de la sociedad; en consecuencia, para hacer valer sus derechos no deben cometer actos de terrorismo ni de violencia contra otras comunidades. Por lo demás, el párrafo 4 del artículo 8 de la Declaración dice inequívocamente que "Ninguna disposición de la presente Declaración puede interpretarse en el sentido de que autoriza actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, incluidas la igualdad soberana, la integridad territorial y la independencia política de los Estados".

60. El representante de Sri Lanka recuerda a este respecto que, en su resolución 1996/19, titulada "La tolerancia y el pluralismo como elementos inseparables de la promoción y protección de los derechos humanos", la Comisión condenó categóricamente, todos los actos y actividades violentos que atenten contra los derechos humanos y las libertades fundamentales, la democracia, la tolerancia y el pluralismo. Ahora bien, actualmente numerosos grupos no gubernamentales recurren a la violencia, so pretexto de ejercer sus derechos de minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, y a menudo dan prueba de intolerancia, oponiéndose en la práctica al pluralismo. Conviene pues que la Comisión se dedique a promover los valores de la democracia, el pluralismo y la tolerancia. La Comisión debería desconfiar de los grupos que en apariencia defienden los derechos de las minorías y piden reparaciones por la violación de esos derechos, pero que en realidad son agentes de organizaciones que tratan de atentar contra la integridad de Estados soberanos y desestabilizar sociedades multiculturales, para ejercer un dominio basado en la pertenencia étnica o religiosa.

61. El informe del Grupo de Trabajo sobre las minorías, acerca de su segundo período de sesiones (E/CN.4/Sub.2/1996/28) contiene un gran número de elementos importantes que deberían retener la atención de la Comisión. En lo relativo a la definición de las minorías, la delegación de Sri Lanka señala lo indicado en el párrafo 132 según el cual, en vista del entendimiento alcanzado por el Grupo de Trabajo encargado de redactar la Declaración, el derecho de los pueblos a la libre determinación no se había hecho extensivo a las minorías. En el párrafo 161 de este mismo informe, se lee que el observador de Finlandia señaló el riesgo de conceder a las minorías derechos demasiado amplios que pudieran provocar discriminación. Otra cuestión importante que debe examinarse más a fondo es la de los contactos y vinculaciones entre minorías de países distintos, y sus incidencias en el pleno ejercicio de los derechos étnicos o lingüísticos, no sólo de las minorías sino también de grupos aparentemente mayoritarios que sufren de un complejo minoritario.

62. Además, el Grupo de Trabajo recomendó (párr. 209) que se presentara información adicional y más sustantiva sobre la existencia de mecanismos nacionales de recurso y conciliación, y en particular sobre cómo se habían establecido y funcionaban. A este respecto Sri Lanka decidió, en agosto de 1996, ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con lo que todos los ciudadanos de Sri Lanka que se consideren víctimas de una violación de sus derechos, incluso en su condición de minorías o de grupos religiosos, podrían dirigirse en última instancia a un órgano internacional de solución de diferencias. Por otra parte, se ha creado un cargo de comisario parlamentario para la administración (ombudsman), cuyo titular está encargado de investigar todas las reclamaciones o alegatos formulados por los ciudadanos, incluidos los miembros de las minorías, respecto de la violación de sus derechos fundamentales cometida por agentes del Estado u otros representantes de instituciones públicas. Conviene observar también que el 17 de marzo entró en funciones oficialmente la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, y que su composición es conforme a la ley que la constituyó y que estipula que en dicha Comisión deben estar representados los diferentes grupos que forman la sociedad de Sri Lanka. Estas medidas son recientes, pero la Constitución de Sri Lanka garantiza en cualquier caso los derechos fundamentales de todas las minorías del país, y en particular el derecho a utilizar el propio idioma, practicar libremente la propia religión, aplicar las leyes de la minoría respecto al matrimonio y la transmisión del patrimonio, y observar las propias costumbres. El Gobierno de Sri Lanka expresa la esperanza de que las disposiciones constitucionales en vigor, y las previstas en los proyectos de enmienda de la Constitución, así como las medidas tomadas recientemente, permitirán que todas las minorías de Sri Lanka gocen plenamente de la integridad de sus derechos.

63. El Sr. GHANAVI (Observador del Irán) hace uso de la palabra en relación con el punto 19, y observa que la tendencia a la intolerancia religiosa va en aumento. Un ejemplo impresionante de ello es la islamofobia de algunos países occidentales. El islam y los musulmanes se han convertido en el blanco preferido de los ataques de ciertos intelectuales que tratan desesperadamente de reanimar odios que se remontan a la época de las cruzadas. En el ámbito de la vida práctica, los musulmanes, a menudo calificados de fundamentalistas, son objeto de restricciones políticas y religiosas inaceptables. En lo político se les considera una amenaza, lo que permite justificar la violencia contra ellos y contra sus bienes. Aunque se reconozca su derecho a profesar o practicar su religión, con frecuencia se les priva de otros derechos, como el derecho a la educación. Los medios de comunicación occidentales contribuyen a la hostilidad contra los musulmanes, dramatizando todos los incidentes que se producen para conseguir más lectores u oyentes. La situación de las minorías musulmanes en Occidente es tanto más preocupante cuanto que dichas minorías no disponen de ningún mecanismo de protección de sus derechos, como los existentes para reprimir el antisemitismo. Es curioso que los numerosos instrumentos internacionales para la protección de las minorías no parezcan poder aplicarse a las minorías musulmanas en Occidente, por razón de los tenaces prejuicios contra esas minorías.

64. Tras haber leído con interés el informe del Relator Especial sobre la cuestión de la intolerancia religiosa (E/CN.4/1997/91), la delegación del Irán estima que sus conclusiones y recomendaciones adolecen de un planteamiento fragmentario del problema de la libertad de religión y la intolerancia religiosa. El Relator Especial parece creer que la religión es la principal fuente de intolerancia; con ello, se corre el riesgo de proporcionar un argumento teórico al fenómeno de la intolerancia hacia las convicciones religiosas. La delegación del Irán espera pues que, en su próximo informe a la Comisión, el Relator Especial estudiará este fenómeno en detalle.

65. El Sr. EGÜZ (Observador de Turquía) dice que los problemas con que se enfrentan los trabajadores migrantes son sumamente preocupantes, ya que millones de personas se encuentran privadas de toda protección jurídica. En el día de hoy, 3 millones de ciudadanos turcos viven fuera de su país; el 80% de ellos optan por quedarse definitivamente en el país de acogida e integrarse en la sociedad en la que viven.

66. Como ha indicado el representante de la OIT en su declaración relativa al punto 13, la discriminación contra los trabajadores migrantes es un fenómeno generalizado, sobre todo en los lugares de trabajo, lo que obstaculiza el acceso de esos trabajadores al mercado laboral y su integración social; así pues, es indispensable tomar medidas para prohibir este tipo de discriminación, ya que la marginación y la exclusión de los trabajadores migrantes reforzarán obligatoriamente los sentimientos xenófobos de la población de los países de acogida, con la consiguiente infrutilización de los recursos humanos disponibles.

67. La delegación de Turquía opina que, en el fondo, el problema estriba en el estatuto de los trabajadores migrantes, a quienes en el país de residencia se les considera siempre simples "extranjeros". Para resolver este problema, estos países deberían aplicar políticas no ya de asimilación sino de integración, lo que significa que deberían permitir que los trabajadores migrantes participen en la vida política, social y cultural del país, concediéndoles en consecuencia el derecho a votar y ser elegidos en las elecciones locales. Asimismo, debería facilitárseles la obtención de la doble ciudadanía, como hizo Turquía en 1981 modificando sus leyes sobre la nacionalidad. Por desgracia, un elevado número de países de acogida adoptan medidas que van en sentido opuesto. Por ejemplo, el 15 de enero de 1997 el Gobierno alemán adoptó una nueva ley, en virtud de la cual los niños de menos de 16 años de edad, residentes en Alemania de padres turcos, deben obtener un visado o un permiso especial de residencia. Esta ley, que será aplicable a unos 800.000 niños nacidos en Alemania y que han vivido en este país casi toda su vida, no facilitará mucho la integración de los trabajadores migrantes turcos en la sociedad alemana.

68. Por otra parte, los trabajadores migrantes son víctimas propiciatorias del racismo y la xenofobia, fenómenos que se están recrudeciendo en Europa occidental y que a menudo son fruto de la discriminación basada en la raza o el origen étnico. Cuanto más se excluya a los migrantes de la vida de las sociedades, más habrán de padecer estos fenómenos. Por consiguiente, es

menester que la comunidad internacional movilice todas sus fuerzas para resolver estos problemas complejos y promover verdaderamente la democracia, los derechos humanos y el pluralismo.

69. El Sr. NÁRAY (Observador de Hungría) toma la palabra en relación con el punto 17 y dice que los trágicos conflictos que se han registrado recientemente en Europa y en otros continentes demuestran que las violaciones de los derechos de las minorías pueden entrañar la desestabilización de enteras regiones, y suponen una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Afortunadamente, un cierto número de sociedades pluralistas y auténticamente democráticas, reconociendo que el respeto de los derechos de las minorías es una condición necesaria para el funcionamiento normal del Estado, no sólo respetan efectivamente estos derechos sino que crean las condiciones adecuadas para que las minorías puedan expresarse y preservar y desarrollar su identidad. Es evidente que en una sociedad auténticamente democrática el Estado debe actuar en beneficio de todos los ciudadanos, sea cual sea su origen, y que, al favorecer el espíritu de diálogo y de tolerancia se sirve a los intereses de todo el país.

70. El Gobierno de Hungría está convencido de que la existencia de minorías -a condición de que se respeten sus derechos- constituye una ventaja económica, social y cultural importante para el país y no representa una amenaza a la integridad del Estado. Inspirada en este principio, Hungría ha celebrado recientemente con Eslovaquia y con Rumania sendos tratados que contienen cláusulas relativas a la promoción y la protección de los derechos de las minorías; estas disposiciones se aplican ya con Rumania, y deberían aplicarse pronto con Eslovaquia.

71. En el plano internacional, la aprobación por la Asamblea General en 1992 de la Declaración de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, que establece normas mínimas de protección de los derechos de las minorías, ha sido una primera señal de la mayor importancia atribuida por las organizaciones regionales e internacionales a las cuestiones relativas a las minorías. Un segundo paso importante fue la creación por la Subcomisión, en 1995, del Grupo de Trabajo sobre las minorías. La delegación de Hungría se felicita en particular de que los representantes de las minorías hayan podido participar en los dos períodos de sesiones del Grupo de Trabajo para dar a conocer su punto de vista, lo que ha conferido una mayor credibilidad a los trabajos del Grupo. Observa con satisfacción que en su segundo período de sesiones el Grupo de Trabajo concentró sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones concretas a los problemas de las minorías, en vez de entregarse a estériles debates teóricos. Apoya sin reserva la idea de recoger informaciones sobre la constitución y la legislación de los Estados, así como la aplicación de las leyes, y alienta al Grupo de Trabajo a seguir las recomendaciones del Sr. Eide, o sea, estudiar los medios de establecer y fortalecer mecanismos nacionales, regionales e internacionales de seguimiento. Al tiempo que reconoce la importancia y la utilidad del Grupo de Trabajo, el Gobierno de Hungría sigue estando convencido de que la Comisión, en el contexto de sus procedimientos temáticos, debería nombrar a un experto o a un representante encargado de estudiar a fondo la cuestión de las minorías.

72. Las actividades de la Comisión en lo relativo a la protección de los derechos de las minorías pueden y deben completarse con las de órganos tradicionales tales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y otros mecanismos de la Comisión encargados de estudios temáticos y por países. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos tiene también una función insustituible que desempeñar en la detección rápida de los atentados contra los derechos de las minorías, para evitar que situaciones debidas a una protección insuficiente de estos derechos no degeneren en un conflicto más grave. Por último, todos los organismos de las Naciones Unidas deberían dedicar más atención a la compleja cuestión de las minorías nacionales y étnicas. El Gobierno de Hungría está dispuesto a cooperar en la búsqueda de soluciones.

73. El Sr. VIGNY (Observador de Suiza) observa con satisfacción, ante todo, que al segundo período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre las minorías han asistido muchos participantes de procedencias muy diversas. El Grupo de Trabajo es el lugar informal y privilegiado donde se intercambian informaciones sobre la situación de las minorías, y los especialistas en la cuestión se conciertan con miras a encontrar soluciones a los conflictos que enfrentan a los Estados y las minorías.

74. El Grupo de Trabajo ha aprobado varias recomendaciones esenciales, una de las cuales tiene por finalidad determinar el objeto, contenido y alcance de los artículos 2, 3 y 4 de la Declaración de derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas; ello debería posibilitar el establecimiento, a continuación, de mecanismos de seguimiento de la aplicación de este instrumento por los Estados. La delegación de Suiza se congratula de la próxima organización de un seminario sobre la educación intercultural, que debería permitir una mejor determinación de los elementos clave de la integración cultural -por oposición a la asimilación cultural- y la identificación de medidas positivas de ejecución al respecto. En este sentido, sería conveniente que otros donantes contribuyesen a la financiación de este seminario, que aún no está cubierta.

75. La aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo requiere una colaboración estrecha entre el Grupo y los mecanismos temáticos de la Comisión, así como los órganos de seguimiento de los tratados, los organismos especializados de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales. Asimismo, en el marco de la aplicación del programa de la protección de personas pertenecientes a minorías, deberían fortalecerse las actividades de prevención, e intervenir rápidamente en las situaciones en las que están implicadas las minorías, y que precisan una acción urgente. Los Estados deberían proporcionar a los órganos de seguimiento de los tratados informaciones precisas, de naturaleza jurídica y fáctica, sobre la protección y la promoción de los derechos de las personas pertenecientes a las minorías, en el marco de los artículos pertinentes de los dos Pactos internacionales relativos a los derechos humanos, del artículo 2 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y de los artículos 29 y 30 de la Convención sobre relativo los Derechos del Niño.

76. La delegación de Suiza expresa la esperanza de que se renueve a tiempo el mandato del Grupo de Trabajo sobre las minorías, para que pueda reunirse en las mejores condiciones posibles en 1998, y a continuación, una vez al año, por lo menos en 1999 y en el año 2000.

77. El Sr. MOUSSAEV (Observador de Azerbaiyán) dice que el afán legítimo de proteger los derechos de las minorías no debe hacer que se toleren las manifestaciones agresivas del nacionalismo, el separatismo y el extremismo religioso y político, que pueden ir hasta el terrorismo. No es admisible que, en nombre de su derecho a la autodeterminación, ciertos grupos étnicos priven de este mismo derecho a la población mayoritaria de un país, así como a los otros grupos étnicos. Dar carta de naturaleza a todas las reivindicaciones separatistas no es, desde luego, el mejor medio de fortalecer la paz y la seguridad en el mundo. Para atenuar las tensiones étnicas, es preferible establecer sistemas políticos verdaderamente democráticos en los cuales todos los ciudadanos -incluidos los pertenecientes a minorías- tengan la posibilidad de estar debidamente representados, y velar por el respeto de las normas fundamentales de la coexistencia pacífica enunciadas en la Carta de las Naciones Unidas.

78. A este respecto, hay que recordar que el párrafo 4 del artículo 8 de la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, dispone que ninguna disposición de la Declaración podrá interpretarse en el sentido de que autoriza actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, incluidas la igualdad soberana, la integridad territorial y la independencia política de los Estados. Esto significa que los miembros de las minorías deben reconocer y respetar sus deberes hacia el resto de la sociedad, y abstenerse, por ejemplo, de hacer propaganda o lanzar llamamientos a la violencia.

79. Azerbaiyán estima que las situaciones en las que están implicadas minorías deben resolverse en la medida de lo posible de modo pacífico y constructivo, dando a las minorías la posibilidad de ejercer sus derechos en las esferas educativa, lingüística y cultural, y concediéndoles eventualmente un cierto margen de autonomía en el ámbito del Estado. A este respecto, ha acogido con gran satisfacción la declaración del Presidente en ejercicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en ocasión de la última Cumbre de la OSCE celebrada en Lisboa, sobre la solución del conflicto en la región azerbaiyana del Alto Karabaj y sus alrededores. En esta declaración se reafirman los tres grandes principios definidos por el Grupo de Minsk, y apoyados por todos los Estados miembros de la OSCE excepto Armenia, a saber: respeto de la integridad territorial de Armenia y de Azerbaiyán, concesión, en el ámbito territorial de Azerbaiyán, de la máxima autonomía a la región del Alto Karabaj, y necesidad de garantizar la seguridad de esta región y del conjunto de su población, procurando en particular que todas las partes respeten las disposiciones del acuerdo. Las actividades de la OSCE para llegar a una solución pacífica del conflicto han recibido el apoyo sin reservas de la Asamblea General en su quincuagésimo primer período de sesiones (resolución 51/57). Azerbaiyán considera que la decisión adoptada en la Cumbre de Lisboa constituye una importante

contribución a la solución pacífica del conflicto, sobre la base del respeto a la integridad territorial de Azerbaiyán y de la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, incluidos los miembros de las minorías étnicas.

80. El Sr. DOUVOS (Observador de Grecia) dice que su país es profundamente respetuoso de la libertad religiosa en todas sus formas, y que el derecho a la libertad de cultos está inscrito en su Constitución. Grecia es copatrocinadora de la resolución que cada año aprueba la Asamblea General sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa y debe ratificar próximamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 18 se refiere a la libertad de conciencia y religión.

81. La delegación de Grecia desea centrar más especialmente su intervención en las observaciones formuladas por el Relator Especial sobre la cuestión de la intolerancia religiosa, después de su visita a Grecia, en junio de 1996 (A/51/542/Add.1 y E/CN.4/1997/91, párrs. 46 a 51).

82. El concepto de "religión conocida" que figura en el artículo 13 de la Constitución griega no es, como parece creer el Relator Especial, una manifestación de intolerancia religiosa sino un modo de establecer una distinción entre las creencias religiosas que se expresan públicamente y los dogmas o sectas cuyo culto es clandestino y pueden resultar peligrosas. El artículo 18 del Pacto, por lo demás, prevé la posibilidad de limitar la libertad de religión si esta limitación es necesaria para proteger el orden público. En cuanto a que se reconozca a la Iglesia ortodoxa la condición de "religión dominante", tampoco es cosa de ofuscarse puesto que el propio Relator Especial reconoce que la religión de Estado no es contraria de por sí a los instrumentos internacionales. El artículo 3 de la Constitución no hace más que reflejar una realidad objetiva a este respecto, a saber, que la religión ortodoxa es la de la mayoría aplastante de la población.

83. Al Relator Especial le inquieta en particular la legislación relativa al proselitismo. Ahora bien, esta legislación sanciona de hecho el proselitismo por medios fraudulentos y, como ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene por objeto proteger la religión contra las injerencias de mala fe, y no limitar la libertad de enseñanza religiosa.

84. En cuanto a la legislación relativa a los lugares de culto, hay que saber que los permisos de construcción a que se refiere el Relator Especial no son concedidos de manera discrecional por la administración: ésta se limita a verificar que en cada caso se reúnen las condiciones previstas por la ley. El Gobierno griego hará todo lo posible por resolver la lentitud de los trámites administrativos señalada por el Relator Especial.

85. En lo relativo a la situación de las comunidades religiosas, el observador de Grecia señala que la conclusión general del Relator Especial, según la cual "las minorías católica, protestante y los testigos de Jehová son víctimas, en diversos grados, de un clima general de intolerancia", parece ser desmentida por varias constataciones positivas relacionadas, por ejemplo,

con la libertad de las publicaciones religiosas y de los cultos católico y protestante. Los miembros de las comunidades católica, protestante y judía, así como los testigos de Jehová, tienen en Grecia los mismos derechos y obligaciones ante la ley que los demás ciudadanos griegos, y son perfectamente libres de celebrar su culto, a condición de no perturbar el orden público.

86. En cuanto a la minoría musulmana de Tracia, la delegación de Grecia se felicita de la recomendación del Relator Especial, según la cual las partes interesadas deben respetar sus compromisos internacionales derivados del Tratado de Lausana.

87. El Sr. HASSAN (Observador del Sudán) dice que ha leído con interés el informe del Relator Especial sobre cuestión de la intolerancia religiosa (E/CN.4/1997/91) y en particular los párrafos 52 a 55, relativos al Sudán.

88. El Sudán es un país muy extenso en el que conviven muchas culturas y grupos étnicos. Musulmanes, cristianos y animistas coexisten en un clima de tolerancia total, favorecido por un sistema federal que confiere a los 26 Estados del Sudán una cierta autonomía, y les permite elegir sus opciones de desarrollo. Todas las regiones y grupos se sienten, no obstante, miembros de una misma nación y reconocen la necesidad de compartir la autoridad y respetar las normas comunes para asegurar el bienestar de todos. Si bien el árabe es el idioma oficial, el inglés está muy extendido, y el Gobierno no se opone a la difusión de los dialectos locales y a su enseñanza en la escuela.

89. La libertad de religión y la no discriminación están garantizadas por la ley, y el derecho penal reprime las incitaciones al odio entre los grupos. El Gobierno, totalmente respetuoso de los diferentes dogmas, ha decidido no aplicar la shari'a a los no musulmanes, y en particular a los cristianos y a los animistas que viven en el sur del país. La religión cristiana se enseña con toda libertad en las escuelas cristianas, y se están construyendo varias iglesias.

90. Así pues, el Sudán considera que las afirmaciones de algunos países extranjeros y organizaciones no gubernamentales según las cuales los disturbios en el sur del país constituyen en realidad una guerra de religión entre cristianos y musulmanes no son más que interpretaciones partidistas que tratan de menoscabar la integridad y la unidad territorial del Sudán. Esta "guerra" está promovida en realidad desde el exterior, como prueban los numerosos ataques contra las fronteras meridional y oriental del país. En cuanto al acuerdo político firmado con un cierto número de facciones rebeldes del sur y de los montes Nuba, este acuerdo es a la vez la expresión de la voluntad popular y la culminación de una larga tradición de tolerancia, que es una de las características del pueblo sudanés.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.